

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintiuno (2021)

JUEZ:	Magda Cristina Castañeda Parra
MEDIO DE CONTROL:	Controversias Contractuales
RADICACION No.:	110013343-064-2018-00221-00
DEMANDANTE:	Sermako SAS
DEMANDADO:	Fondo de Desarrollo LOCAL DE KENNEDY

Controversias Contractuales
DEJA SIN VALOR NI EFECTO
CORRE TRASLADO SOLICITUD MEDIDA CAUTELAR

1.- ANTECEDENTES

EL 26 de junio de 2018 (fl. 69), Sermako SAS radicó demanda de controversias contractuales, contra el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, la que fuera inadmitida mediante auto del 20 de septiembre de 2018 (fl. 74-75).

En escrito radicado con la demanda, solicitó el decreto de medidas cautelares consistente en el embargo y secuestro de los dineros encontrados en las cuentas de ahorro y corrientes de los siguientes bancos que figuran a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy: Banco BBVA, Banco Bancolombia, Banco Popular, Banco Colpatria, Banco Citibank, Banco agrario, Banco de Bogotá, Banco Av villas, Banco Caja Social, Banco de occidente y Banco Davivienda. (fl. 67).

A través de auto del 21 de junio de 2019, el Despacho declaró la nulidad de lo actuado (fl. 84).

Por auto del 31 de octubre de 2019, se admitió la demanda, y se corrió traslado a la parte demandada Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (fl. 114-116)

Mediante auto del 16 de diciembre de 2020, el Despacho fijó fecha para la celebración de audiencia inicial para el 23 de junio de 2021. (fl. 192)

II.- Consideraciones

En relación con la potestad de saneamiento, el artículo 103 de la Ley 1437, expresamente dispone que *“los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico”*.

Por su parte, el artículo 11° del Código General del Proceso prescribe que *“el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”*, lo que se refleja en el deber consagrado en el numeral 1° del artículo 42 ibídem de *“dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización y procurar la mayor economía procesal”*.

Es así como la potestad del Juez de sanear el proceso en cada etapa procesal, se encuentra reglada en el artículo 207 del CPACA, así:

“ARTICULO 207. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarreen nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes”,

Sumado a lo anterior, el Juez no sólo controlará los presupuestos de validez de la demanda, sino también las circunstancias constitutivas de nulidad (artículo 133 del Código General del Proceso) y aquellas situaciones que puedan afectar la validez y eficacia del proceso, amén de aquellas otras irregularidades que puedan incidir en su desenvolvimiento, que no encajen en una u otra de las categorías mencionadas. En otras palabras, lo que inspira la potestad de saneamiento es la solución de todas aquellas irregularidades o vicios que puedan evidenciarse durante el trámite del proceso a fin de que termine con una sentencia de mérito que ponga fin a la controversia, evitando su terminación por meras irregularidades o por cuestiones formales subsanables.

Descendiendo al caso en concreto, el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone respecto de la procedencia de las medidas cautelares que: *“(…) En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o Magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento (...)”*.

Por su parte, el artículo 233 del mismo estatuto señala *“Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. (...) El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre*

ella en escrito separado **dentro del término de cinco (5) días**, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda."

Una vez revisado el expediente, se observó que se omitió dar el trámite de que trata el artículo 233 del CAPACA a la solicitud de medida cautelar presentada por la parte actora; por lo que con base en lo señalado en párrafos precedentes, este Despacho ordenará correr traslado a la parte demandada de la medida cautelar solicitada.

Por lo anterior, el Despacho

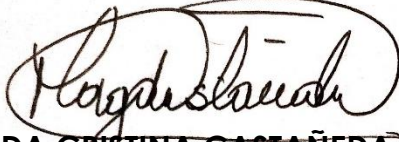
RESUELVE

1.- Dejar sin valor ni efecto el auto del 16 de diciembre de 2020, mediante el cual este Despacho fijó fecha para la celebración de audiencia inicial. En su lugar, se ordena:

- **Correr** traslado al extremo pasivo, por el término de cinco (5) días, de la solicitud de medida cautelar presentada por la parte actora, de conformidad con lo previsto en el artículo 233, incisos 1º y 2º, del C.P.A.C.A.

.- Por Secretaría, notifíquese la presente decisión a las partes y al Ministerio Público conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
JUEZ